

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

El veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a proferir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por la señora **MARÍA MARGARITA LOAIZA RAMÍREZ** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** (en adelante COLPENSIONES), tramitado bajo el radicado único nacional No. **05001-31-05-006-2019-00629-01**.

AUTO

De conformidad con la sustitución de poder allegada junto con los alegatos de conclusión por parte de la sociedad RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S., quien representa judicialmente los intereses de Colpensiones en este proceso, se procede a reconocer personería al abogado HÉCTOR LEONEL ARISTIZÁBAL MARÍN, portador de la T.P. 264.290 del C. S. de la Judicatura, para que represente a Colpensiones en este proceso como apoderado sustituto.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto, y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos.

1. ANTECEDENTES:

A través de la presente acción, la demandante pretende se declare que le asiste derecho a la sustitución pensional derivada del fallecimiento de su compañero permanente SALOMÓN MEJÍA URREGO, y que, como consecuencia de ello, se condene a COLPENSIONES a reconocerle y pagarle la referida sustitución de manera retroactiva, con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones, expone la demandante que el señor SALOMÓN MEJÍA URREGO era soltero, estaba pensionado y falleció el 20 de septiembre de 2018.

Relata la actora que ella y su compañero permanente compartieron techo, lecho y mesa por más de 39 años de manera ininterrumpida hasta el momento de la muerte del señor Salomón. Dice que la convivencia inicio en el año 1979, momento para el cual la actora tenía 5 hijos.

Dice que se presentó a reclamar la pensión de sobrevivientes, pero COLPENSIONES le negó la misma mediante Resolución SUB311852 del 30 de noviembre de 2018, por no haber acreditado el requisito de la convivencia, decisión que fue confirmada en resoluciones posteriores.

Expone la actora que la investigación administrativa adelantada por COLPENSIONES para acreditar la convivencia, no tuvo en cuenta las pruebas que le fueron aportadas a la entidad tales como fotografías de la familia, declaraciones juramentadas, el poder que le dio su compañero para que le reclamara la pensión y la solicitud de incrementos pensionales que elevó el señor SALOMÓN por ella como compañera, entre otras.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

La oficina judicial de primera instancia despachó de manera favorable las pretensiones de la demanda, condenando a COLPENSIONES a reconocer y pagar a la demandante la pensión de sobrevivientes desde la fecha de deceso del pensionado, sin liquidar suma en concreto.

Ordenó a COLPENSIONES, seguir reconociendo y pagando la pensión de sobrevivientes a la actora en el mismo monto que venía siendo disfrutada por el causante. También ordenó indexar el retroactivo pensional y absolvió de la solicitud de intereses moratorios, condenando en costas a COLPENSIONES en cuantía de \$3'500.000.

Para sustentar su decisión, la *a quo* adujo que, en este caso con la prueba documental y testimonial recabada en el proceso, se lograba acreditar la calidad de compañera permanente de la demandante, quien logró demostrar un tiempo de

convivencia muy superior al requerido en la norma para ser beneficiaria de este derecho.

3. DEL RECURSO DE APELACIÓN:

La anterior decisión fue apelada parcialmente por la apoderada de COLPENSIONES, quien manifestó que en este caso no debe proceder la condena por concepto de indexación de las mesadas, toda vez que cuando la entidad resulta obligada a efectuar el pago de alguna prestación de vejez, paga las mesadas de manera retroactiva, atendiendo a la variación de índice de precios al consumidor IPC que expide el DANE, lo que ya representa una actualización monetaria, de manera que si se da por sentado el reconocimiento de la indexación de la condena, implicaría que dichos dineros deben indexarse doblemente.

4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, el apoderado judicial de COLPENSIONES, allegó escritos de alegaciones, expresando resumidamente que teniendo en cuenta la fecha del fallecimiento del señor MEJÍA ORREGO, esto es el 20 de septiembre de 2018 la norma aplicable al caso es la vigente a la fecha de su deceso, esto es la Ley 797 de 2003, artículos 12 y 13 los cuales modificaron los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993.

En el presente asunto, la entidad negó el derecho pensional de la actora mediante resoluciones SUB 311852 del 30 de noviembre de 2018, SUB 8789 de 16 de enero de 2019 y DIR 1276 del 04 de febrero de 2019 en tanto no se logró demostrar el factor convivencia, pues, después del despliegue probatorio de la investigación administrativa, no existió certeza y por el contrario quedaron dudas e inconsistencias frente a los testimonios ofrecidos.

En solicitud radicada ante la entidad se indicó que los 5 hijos de la actora eran nacidos con anterioridad al año 1979 y de la investigación se coligió que 3 de ellos eran nacidos después de 1979 existiendo dudas entre la relación de convivencia entre las partes.

Adicionalmente no aportó pruebas físicas, fotos ni documentos que la relacionen como esposa o compañera, situaciones que no se demostraron pese a existir

inspección de campo para corroborar lo enunciado. La citada Resolución en aplicación al concepto de 25 de junio de 2015 radicado BZ_2015_5672865 emitido por la gerencia nacional de reconocimiento, indicó:

“c. Investigación administrativa Es el proceso interno mediante el cual se someten a corroboración y/o verificación los medios de prueba allegados por los solicitantes para acreditar su condición de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. (...)

“II. La investigación administrativa tiene por objeto dilucidar la imprecisión surgida de las pruebas obrantes en el expediente de pensión de sobrevivientes, pero solamente en los casos en los cuales de los medios de prueba aportados no logren evidenciarse expresamente y sin lugar a equívocos, los extremos de la convivencia o la dependencia económica”.

Que de conformidad la normativa se procedió a aperturar la investigación administrativa, misma que arrojó como resultado:

“NO SE ACREDITÓ el contenido y la veracidad de la solicitud presentada por María Margarita Loaiza Ramírez, una vez analizadas y revisadas cada una de las pruebas aportadas en la presente investigación administrativa. Ya que no se logró confirmar una relación de conveniencia entre la señora María Margarita Loaiza Ramírez y el señor Solomon Mejía Orrego, ya que hay dudas frente a las personas entrevistadas como familiares del causante y contradicciones en la inflación de la solicitante.”

De acuerdo con lo anterior, solicito respetuosamente a los Magistrados del Tribunal, negar la solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por muerte de pensionado.

5. PROBLEMA JURÍDICO PARA RESOLVER:

El problema jurídico a resolver en esta instancia se circunscribe a establecer si la demandante acreditó durante el proceso el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 para acceder a la sustitución pensional en condición de compañera permanente y en caso afirmativo, se establecerá si resulta procedente imponer condena en contra de la demandada por concepto de indexación de la condena.

Por ser competente esta Corporación para conocer de la apelación y de la consulta de la sentencia de primera instancia, conforme lo dispuesto en los artículos 10 y 14 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver la misma, previa las siguientes,

6. CONSIDERACIONES:

En principio debería la Sala ocuparse del estudio del recurso de apelación, con apego al imperativo contenido en el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual: *“La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”*, sin embargo, no podemos olvidar que el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007 impone consultar las sentencias en favor de COLPENSIONES cuando le sean adversas, por lo que la legalidad del fallo será estudiada en su integridad.

Sea lo primero manifestar que como quiera que el causante de la pensión de sobrevivientes demandada falleció el **20 de septiembre de 2018**, como se prueba con el registro civil de defunción obrante a folio 14 del archivo N°1 del expediente digital de primera instancia, las normas legales a aplicar para definir el derecho que tengan o no los posibles beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, es la vigente para la fecha del deceso del causante, es decir, el art. 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, norma esta última, que dispone en el literal a), que tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, y que en caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte.

Adicional a lo anterior, se advierte, que en este caso, se encuentra probado, y por tanto por fuera de discusión, conforme los documentos que militan en el expediente administrativo allegado por COLPENSIONES, el cual contiene los documentos administrativos del causante, que al señor SALOMÓN MEJÍA URREGO, le fue reconocida una pensión de vejez por parte de del ISS hoy COLPENSIONES, según la Resolución N° 12301 del 13 de noviembre de 1979, a partir del 20 de septiembre de este mismo año.

Ahora, sobre las condiciones que debe cumplir la demandante para ostentar la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, el artículo 47 de la ley 100 de 1993, modificado por el art. 13 de la Ley 797 de 2003, en sus literales a) y c), disponen que tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en forma vitalicia, el

cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, y que en caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte.

A pesar de lo anotado en precedencia, se debe poner de presente que desde el año 2011, la Sala de Casación Laboral (en adelante SCL) de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la sentencia 40055 del 29 de noviembre de 2011, M.P. Dr. GUSTAVO JOSÉ GENEKO MENDOZA, posición que ha sido ratificada en posteriores sentencias, al interpretar el literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, ha precisado que los 5 años de convivencia cuando se trate de esposos, es decir, de personas que contrajeron matrimonio, para hacerse acreedor a la pensión de sobrevivientes, no debe haber ocurrido necesariamente en los últimos cinco (5) años, sino en cualquier tiempo siempre que sea continua durante 5 años.

Para el caso de la compañera o compañero permanente supérstite, en un principio, la jurisprudencia de la SCL de la Corte Suprema de Justicia, sostuvo que debía acreditarse que estuvo haciendo vida marital con el o la causante hasta su muerte, y haya convivido con el o la fallecida no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte, sin importar que el o la causante fuera pensionado o afiliado.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SL1730 de 2020, revaluó la posición jurisprudencial, sobre la exigencia de los cinco años de convivencia para hacerse acreedor a la pensión de sobrevivientes cuando se tratara de un afiliado al sistema pensional, para realizar una nueva interpretación del literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, advirtiendo que el mínimo de convivencia de 5 años se aplica únicamente al caso en que la pensión de sobrevivientes se causa por muerte del pensionado, pero que en el caso de los afiliados: *“... no es exigible ningún tiempo mínimo de convivencia, toda vez que con la simple acreditación de la calidad exigida, cónyuge o compañero (a), y la conformación del núcleo familiar, con vocación de permanencia, vigente para el momento de la muerte, se da cumplimiento al supuesto previsto en el literal de la norma analizado, que da lugar al reconocimiento de las prestaciones derivadas de la contingencia...”*. Además, se precisó en la citada Sentencia que para efecto de lo consagrado en el literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, *“no hay lugar a*

efectuar ninguna distinción entre beneficiarios de un mismo tipo de causante, para el caso un afiliado, esto es, según la forma en la que se constituya el núcleo familiar, si lo es por vínculos jurídicos o naturales, en tanto éste, es decir, el núcleo familiar, es lo que protege el Sistema General de Seguridad Social.”

El anterior criterio fue ratificado en las Sentencia SL3626-2020, SL3785-2020 y SL4008-2020.

No obstante, la Corte Constitucional en la sentencia SU-149 de 2021, dejó sin efectos la providencia SL1730 de 2020, al concluir que en ella se incurrió en defecto sustantivo por interpretar irrazonable del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, al sostener que no es necesario acreditar un tiempo de convivencia con el causante de la pensión cuando se trataba de afiliados al sistema pensional, sino solo estar conformando una familia con vocación de estabilidad al momento del deceso del causante, lo que consideró la Corte Constitución, contradice los principios de igualdad y de sostenibilidad financiera del sistema pensional que además produce resultados desproporcionados respecto de la protección de la familia y las finalidades de la pensión de sobrevivientes.

Además, se argumentó en la citada sentencia de unificación que la Sentencia SL1730 de 2020, incurrió en desconocimiento del precedente, de la Corte Constitucional fijados en la sentencia SU-428 de 2016, apartándose la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia indebidamente de esa decisión, sin cumplir con las cargas de transparencia y suficiencia de la argumentación, pues no se refirió explícitamente su apartamiento del precedente fijado por la Corte Constitucional, ni mucho menos expuso en forma adecuada las razones por las cuales su postura divergente garantizaba de mejor modo los principios y valores constitucionales involucrados, a pesar de que se trataba de un fallo de unificación que determinaba, con carácter vinculante, el contenido y alcance del derecho a la seguridad social ante el problema jurídico materia de decisión en el asunto de la referencia.

En ese orden de ideas, conforme la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ya ha acogido esta Sala del Tribunal, en este asunto, acorde al material probatorio, se analizará el requisito de convivencia de la demandante y el causante, por un lapso no inferior a cinco años ininterrumpidos con anterioridad al deceso del causante.

La demandante **MARÍA MARGARITA LOAIZA RAMÍREZ**, rindió interrogatorio de parte, manifestando que vivió en unión libre con el señor SALOMÓN desde el año 1979. Afirmó que antes de eso, ella estuvo casada y tuvo 5 hijos, pero que su esposo la dejó y posteriormente se fue a vivir con el señor SALOMÓN, quien fue la persona que le ayudó a criar a sus hijos. Afirmó que siempre vivieron juntos, nunca se separaron, que él la tenía afiliada como su beneficiaria en la NUEVA EPS, que vivían de la pensión que devengaba el señor SALOMÓN, que éste no tuvo otras parejas, y que si bien antes de ella tuvo dos hijos, desconoce el paradero de los mismos, ya que el señor SALOMÓN, solo tenía de familia unos hermanos pero que estos vivían lejos.

La demandante también trajo como testigo a la señora **MARÍA ROCÍO HERNÁNDEZ VÉLEZ**, quien manifestó conocer a la actora desde el año 1977 por razones de vecindad. Afirmó que el señor SALOMÓN fue el compañero permanente de Margarita, que vivieron juntos 39 años, que eran sus vecinos. Dice que la pareja no tuvo hijos, aunque afirma que la señora Margarita tenía 5 hijos de una anterior pareja de la que se separó legalmente. Dice que nunca le conoció familia al señor SALOMÓN aparte de unos hermanos que nunca lo visitaban, que tampoco le conoció hijos. Dijo que el causante estaba afiliado a la NUEVA EPS y tenía como su beneficiaria a la señora Margarita, que lo sabe porque cuando Margarita no podía hacer vueltas, era ella quien se encargaba de hacerlas. Dijo que el señor SALOMÓN vivía muy enfermo, que no quiso que lo hospitalizaran sus últimos años de vida, que fue la señora Margarita la que lo cuidó, que se encargó de realizar todos los trámites del sepelio, que ella le ayudaba a Margarita a cuidarlo cuando tenía que salir a hacer vueltas porque el señor SALOMÓN estaba postrado en la cama. Que era él quien se encargaba de los gastos del hogar con la pensión y que era Margarita la que la reclamaba porque él no podía caminar.

Aunado a lo anterior, en el proceso también hay prueba documental de relevancia para dirimir el asunto y entre ellas se encuentran las siguientes:

- Declaración extraproceso rendida por la señora LUZ DARY ARIAS CAMPUZANO, del 11 de marzo de 1999 ante la Notaria Octava de Medellín, en la que declara que la pareja conformada por la señora MARÍA MARGARITA y el señor SALOMÓN, han hecho vida marital desde hace 20 años. (Folio 94 del archivo N°1 del expediente digital de primera instancia)

- Declaración extraproceso rendida por el señor SALOMÓN MEJÍA ORREGO y de la señora MARÍA MARGARITA LOAIZA RAMÍREZ, del 21 de diciembre de 2004 de la Notaria Octava de Medellín, en la que declaran que conviven en unión libre desde hace 27 años. (Folio 96 del archivo N°1 del expediente digital de primera instancia)
- Declaración extraproceso rendida por la señora MARTA LUCILA HERNÁNDEZ VÉLEZ, del 05 de junio de 2007 de la Notaria Octava de Medellín, en la que declara que la pareja conformada por la señora MARÍA MARGARITA y el señor SALOMÓN, conviven en unión libre desde hace 29 años. (Folio 97 del archivo N°1 del expediente digital de primera instancia)
- Declaración extraproceso rendida por el señor SALOMÓN MEJÍA ORREGO, del 04 de septiembre de 2013 ante la Notaria Séptima de Medellín, en la que declara que convive en unión marital de hecho con la señora MARÍA MARGARITA LOAIZA desde hace 34 años. (Folio 98 del archivo N°1 del expediente digital de primera instancia)
- Declaración extraproceso rendida por el señor ABELARDO MEJÍA ORREGO, del 10 de diciembre de 2018 ante la Notaria Única de Dosquebradas, en la que declara que la pareja conformada por la señora MARÍA MARGARITA y el señor SALOMÓN, convivieron como compañeros permanentes de manera estable e ininterrumpida durante 39 años. (Folio 102 del archivo N°1 del expediente digital de primera instancia)
- Declaración extraproceso rendida por la señora ELIZABETH SÁNCHEZ MEJÍA, sobrina del señor SALOMÓN, el 06 de diciembre de 2018 ante la Notaria Segunda de Palmira Valle, en la que declara que la pareja conformada por su tío y la señora MARÍA MARGARITA, convivieron como compañeros permanentes de manera estable e ininterrumpida durante 39 años. (Folio 104 del archivo N°1 del expediente digital de primera instancia)
- Declaración extraproceso rendida por el señor VÍCTOR JOSÉ SÁNCHEZ MEJÍA, del 06 de diciembre de 2018 ante la Notaria Segunda de Palmira Valle, sobrino del señor SALOMÓN, en la que declara que la pareja conformada por su tío y la señora MARÍA MARGARITA, convivieron como

compañeros permanentes de manera estable e ininterrumpida durante 39 años. (Folio 105 del archivo N°1 del expediente digital de primera instancia)

- Declaración extraproceso rendida por la señora MARTHA DEL SOCORRO MEJÍA QUINTERO, sobrina del señor SALOMÓN, del 06 de diciembre de 2018 ante la Notaria Segunda del Circulo de Sevilla Valle del Cauca, en la que declara que la pareja conformada por su tío y la señora MARÍA MARGARITA, convivieron como compañeros permanentes de manera ininterrumpida desde el año 1979 y hasta el momento del fallecimiento de éste. (Folio 106 del archivo N°1 del expediente digital de primera instancia)
- Declaración extraproceso rendida por la señora LILIANA ANDREA ORREGO CABRERA, el 07 de diciembre de 2018 ante la Notaria Diecinueve de Santiago de Cali, en la que declara que la pareja conformada por el señor SALOMÓN y la señora MARÍA MARGARITA, convivieron como compañeros permanentes durante 39 años. (Folio 107 del archivo N°1 del expediente digital de primera instancia)
- Declaración extraproceso rendida por la señora AURORA MEJÍA DE SÁNCHEZ, hermana del señor SALOMÓN, el 06 de diciembre de 2018 ante la Notaria Segunda de Palmira Valle, en la que declara que la pareja conformada por su hermano y la señora MARÍA MARGARITA, convivieron como compañeros permanentes de manera estable e ininterrumpida durante 39 años y hasta el día del fallecimiento. (Folio 109 del archivo N°1 del expediente digital de primera instancia)
- Certificado médico expedido por la Dra. Adriana Anacona Trujillo del 11 de abril de 2017, que da cuenta que el señor SALOMÓN MEJÍA se encuentra en situación de discapacidad postrado en cama y su única cuidadora es la señora MARÍA MARGARITA LOAIZA. (Folio 111 del archivo N°1 del expediente digital de primera instancia)
- Solicitud de afiliación a la EPS del 03 de marzo de 2012, suscrito por el señor SALOMÓN MEJÍA, en la que solicita al Seguro Social, la inclusión como su beneficiaria a la señora MARÍA MARGARITA LOAIZA. (Folio 54 del archivo N°1 del expediente digital de primera instancia)

- Autorización firmada por el señor SALOMÓN MEJÍA con sello de presentación personal en Notaria del 24 de enero de 2012, en la que confiere poder a la señora MARÍA MARGARITA LOAIZA, para que, en su nombre y representación, reclame y firme la nómina correspondiente a su pensión de jubilación de manera mensual, por encontrarse inhabilitado en razón a su enfermedad. (Folio 58 del archivo N°1 del expediente digital de primera instancia)
- Entre folios 61 a 81 del archivo N°1 del expediente digital de primera instancia, también aparece el trámite de acción de tutela que inicio la señora MARÍA MARGARITA LOAIZA el 17 de mayo de 2016, en calidad de agente oficioso del señor SALOMÓN MEJÍA, para lograr la atención en salud que requería el accionante.
- En expediente administrativo que fue allegado por COLPENSIONES, también se visualiza la Resolución GNR 263261 del 06 de septiembre de 2016, en la que reconocen al causante SALOMÓN MEJÍA, los incrementos pensionales por compañera permanente a cargo MARÍA MARGARITA LOAIZA, desde marzo de 2009.
- Finalmente, se aprecian los Registros Civiles de Nacimiento arrimados por la demandante con el libelo genitor, que dan cuenta del nacimiento de sus cinco hijos entre los años 1966 a 1977.

Así las cosas, valorado en su conjunto la prueba testimonial, de interrogatorio de parte y documental, encuentra esta Sala que, tal y como lo concluyó la falladora de primera instancia, que con ella es posible concluir sin lugar a dudas, que entre el causante SALOMÓN MEJÍA ORREGO y la demandante MARÍA MARGARITA LOAIZA RAMÍREZ, existió una relación marital, que duró aproximadamente 39 años y que perduró hasta el momento del fallecimiento del causante en el año 2018, sin que entre éstos hubiese mediado separación alguna.

Se acreditó también que fue la señora MARÍA MARGARITA LOAIZA RAMÍREZ, la encargada de velar por la salud del señor SALOMÓN MEJÍA ORREGO, ya que sus últimos años de vida tuvo varias enfermedades que lo llevaron a estar postrado en una cama, lo que evidencia la dedicación y devoción que tuvo la demandante para con él.

Además de lo dicho, en el proceso también se acreditó que el señor SALOMÓN, tenía afiliada a la señora MARÍA MARGARITA como su beneficiaria en la NUEVA EPS.

Se concluye de la valoración de la prueba, que tango a amigos, vecinos y familiares de la pareja, les consta la convivencia del señor SALOMÓN y de la señora MARÍA MARGARITA, así como las propias declaraciones efectuadas en vida por el señor SALOMÓN, dan cuenta de la convivencia de la pareja de manera permanente e ininterrumpida hasta la fecha de su deceso, evidenciándose en consecuencia la existencia de una vida marital por un espacio muy superior a los 5 años que exige la norma y la existencia de dicha vida marital para el momento del fallecimiento del causante.

Corolario de lo anterior, se confirmará en esta instancia la decisión de la *a quo* de condenar a COLPENSIONES a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a la demandante en calidad de compañera permanente, en los mismos términos que se la venía reconociendo la entidad demandada al causante.

Ahora, en cuanto al recurso de apelación interpuesto por la apoderada de COLPENSIONES, sobre la condena a la indexación de mesadas pensionales retroactivas, recuerda la Sala que una cosa es el aumento anual de las pensiones que debe ir acorde al IPC certificado por el DANE o atado al valor del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional, y otra distinta el valor actualizado de los valores que han dejado de pagarse, por lo anterior, a consideración de la Sala, resulta procedente acceder a la condena de indexación, dado que con la misma se pretende es actualizar el valor adquisitivo de la moneda envilecida por el paso de tiempo, lo que es justo y equitativo en una economía inflacionaria como la nuestra, encontrando en este sentido ajustada la decisión tomada por la juez de instancia.

En lo referente a la excepción de prescripción propuesta por la demandada COLPENSIONES al dar contestación a la demanda, se advierte que dicho fenómeno jurídico no tuvo operancia, pues las mesadas pensionales retroactivas, deben ser reconocidas por la entidad demandada desde el 20 de septiembre de 2018 (fecha del fallecimiento del señor SALOMÓN MEJÍA ORREGO) y como la demanda fue presentada el 27 de septiembre de 2019, según se aprecia del certificado de apoyo judicial de Medellín que obra a folio 7 del archivo N° 1 del expediente digital, no alcanzó a transcurrir el término de prescripción de 3 años

consagrado en los artículos 151 del CPTSS y 488 del CST, para que el derecho se viera afectado por este fenómeno extintivo.

Conforme a las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, se confirmará la sentencia de primera instancia apelada y consultada en favor de COLPENSIONES.

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandada COLPENSIONES y a favor de la parte demandante por haber sido vencido en el recurso de apelación. Las agencias en derecho se fijan en la suma de \$1'160.000.

7. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de noviembre de 2021 proferida por el JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el presente proceso promovido por la señora **MARÍA MARGARITA LOAIZA RAMÍREZ** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES**.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de COLPENSIONES y a favor de la demandante. Las agencias en derecho se fijan en la suma de \$1'160.000.

La anterior sentencia se notifica a las partes en EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada y se firma por quienes en ella han intervenido, los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3f914d89cfaa48caa9d399005185a25f163d548216c541c9d1648abdbb8f93c6**

Documento generado en 29/09/2023 09:53:53 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>